

VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS EN LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN MÉXICO



Violaciones graves a derechos
humanos en la guerra contra
las drogas en México

Directorio

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Consejo Directivo

Ximena Andión Ibañez (Presidenta)
Alejandro Anaya Muñoz
Beatriz Solís Leere
José Luis Caballero Ochoa
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Paulina Vega González
Susana Erenberg Rotbar

Director Ejecutivo

José Antonio Guevara Bermúdez

Coordinación de Defensa

Nancy Jocelyn López Pérez (Coordinadora)
Isis Nohemí Goldberg Hernández
Mariana Teresa Peguero
Natalia Pérez Cordero
Nayomi Aoyama González
Ángel Gabriel Cabrera Silva
Valeria Patricia Moscoso Urzúa (Atención Psicosocial)

Coordinación de Investigación

Lucía Guadalupe Chávez Vargas (Coordinadora)
Alejandra Leyva Hernández

Coordinación de Incidencia

Olga Guzmán Vergara (Coordinadora)

Fotografía

Germán Canseco/ Procesofoto

Diseño

El recipiente

Contacto

Dirección: Tehuantepec #142, Col. Roma Sur,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.
Teléfono: +52(55) 5564 2582
Correo Electrónico: info@cmdpdh.org
www.cmdpdh.org

Redes sociales



@cmdpdh



/cmdpdh

YouTube /CMDPDH

Coordinación de Comunicación

Mariana Beatriz Gurrola Yáñez (Coordinadora)
Luis María Barranco Soto

Coordinación de Desarrollo Institucional

María Cappello (Coordinadora)

Coordinación de Administración

Eduardo Macías Sánchez (Coordinador)
Teresita de Jesús Landa Bernal

Coordinación de Defensores

Axel García Carballar (Coordinador)
Graciela Martínez González
Lizbeth Montessoro Elías

Coordinación de Desplazamiento

Interno Forzado

Brenda Gabriela Pérez Vázquez (Coordinadora)
Cristina Mac Gregor Vanegas
Daniela Bachi Morales

Consultora en Desplazamiento Interno Forzado

Laura Gabriela Rubio Díaz Leal

Índice

Militarización
de la Seguridad Pública

6

Ejecuciones
extrajudiciales

7

Desaparición
forzada

8

Tortura

9

Desplazamiento
interno forzado

10

Situación
de defensoras/es
de derechos humanos

11

Las políticas de prohibición en relación a las drogas han fallado en su objetivo de lograr un “mundo sin drogas” y han forzado al mercado de drogas a permanecer en la ilegalidad. Esto ha desencadenado un mercado ilícito, controlado exclusivamente por organizaciones del crimen organizado, que se ha enlazado con otros mercados criminales y que utiliza la violencia como forma primordial de regulación.

En diciembre de 2006, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en marcha una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado llamada *guerra contra el narcotráfico*. Esta política instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública del país a través del despliegue de miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional y la sustitución de múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, por militares en activo o en retiro.

Ejemplo de lo anterior constituye el hecho que de forma sistemática los militares y elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales, trasladaban a los civiles detenidos tras la realización de operativos a instalaciones militares o de control exclusivo en donde, fuera de cualquier vigilancia de autoridades civiles, las personas detenidas sufrieron vejaciones, torturas e incluso desaparición forzada. Igualmente se ha documentado cómo en las operaciones conjuntas –de autoridades civiles con militares– los elementos del Ejército vestían de civiles.

En la prensa y medios de comunicación masivos se ha difundido la visión del gobierno federal según la cual las personas “abatidas” a raíz de la estrategia contra el crimen organizado son “criminales caídos” y no civiles. La constatación es que dichas muertes no son precedidas por una investigación penal adecuada, incluso en los casos que se ha demostrado posteriormente que no pertenecían a ningún grupo de la delincuencia organizada o no presentaban “peligro” alguno para la sociedad.

Adicionalmente, los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad pública, incluidas las fuerzas militares con las organizaciones del crimen organizado aumentaron. La división territorial de los cárteles se desorganizó, la lucha por las rutas de distribución de drogas entre los cárteles se recrudeció y se fragmentaron los grandes cárteles en grupos más pequeños que pugnaron por el control territorial, diversificando su actividad criminal. Asimismo, se llevó a cabo un uso indiscriminado de la fuerza letal y se extendieron injustificadamente las facultades del Estado, mediante la aprobación de leyes y figuras contrarias al derecho penal democrático, como el arraigo y los testigos protegidos, que funcionan en detrimento de los derechos y garantías judiciales.

En 2012 inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El discurso de guerra promovido por la administración de Calderón fue sustituido por uno de fortalecimiento institucional, de construcción de un pleno Estado de Derecho y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas. Sin embargo, la estrategia de seguridad no ha cambiado de forma significativa.

Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad.

Militarización de la Seguridad Pública



Con el inicio de la *guerra contra el narcotráfico* por el ex presidente Calderón se le asignó a las fuerzas armadas un papel central en la estrategia de seguridad pública. Esta política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos, incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos.

El sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que en el primer mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil efectivos militares.

Tal ha sido la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que corresponden a la policía que **del 2006 al 2012 se registraron 50,915 civiles detenidos por militares**. En lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto (**hasta enero de 2015**) se han registrado **12,840 civiles detenidos por la Sedena**. Por su parte, se han registrado **6,254 personas civiles detenidas por parte de la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014; institución que ha realizado 1,770 operativos conjuntos con otras instituciones estatales, municipales y federales tan solo del 2012 al 2014**.

Por la experiencia del trabajo de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CM-PPDH) ha documentado casos que involucran a víctimas civiles, en los que se tiene probada la participación de elementos militares en violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, cometidas, no solo a partir del 2006 en el contexto de la *guerra contra el narcotráfico*, sino en diferentes contextos de la historia reciente de México, como lo son la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas (1994-1997).

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir tanto la Comisión (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), han podido constatar que la jurisdicción militar, tal como está reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En 2014 se reformó el Código de Justicia Militar, de manera que las instituciones castrenses encargadas de investigar, procesar y sancionar a los responsables de haber cometido infracciones a la disciplina militar, ya no podrían conocer de delitos que constituyeran violaciones a los derechos humanos, en aquellos casos en que las víctimas fueran civiles. Sin embargo, a pesar de esta reforma, no se ha logrado proscribir la competencia de los tribunales militares para conocer de violaciones de derechos humanos cuando las víctimas son militares.

Además, la jurisdicción militar tal y como se regula actualmente, no garantiza los principios para la correcta administración de justicia en relación a su independencia e imparcialidad. El hecho de que la jurisdicción penal militar esté integrada por magistrados y jueces que son oficiales militares nombrados por la Secretaría de Defensa, conlleva en la práctica a que funcionarios del Poder Ejecutivo desempeñen funciones jurisdiccionales. Esto resulta contrario al principio de separación de poderes y a la independencia inherente a todo tribunal de justicia.

Ejecuciones Extrajudiciales



En México el concepto de ejecución se utiliza de forma indistinta, tanto por los medios como por las instituciones gubernamentales. Esto imposibilita la existencia de un registro estadístico claro. El único registro sobre homicidios que existe en México es llevado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Este registro proporciona información sobre muertes en el país, especificando la muerte por homicidio o alguna otra causa violenta. No obstante, no incluye información sobre las particularidades del crimen, impidiendo conocer si son casos de violaciones a derechos humanos.

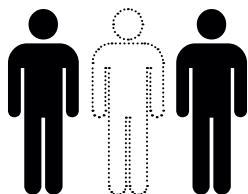
Según cifras oficiales, desde la *guerra contra el narcotráfico* se rompió una tendencia de casi 20 años en la que la tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente cada año, alcanzando un mínimo histórico de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007. **En 2011 la tasa de homicidios se disparó a 24 por cada 100.000 habitantes. Según los registros del INEGI, entre 2007 y 2011 se reportaron 95.646 homicidios, un promedio de más de 50 personas por día.**

En junio de 2014, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, destacó en su Informe final de su misión a México, que **durante la administración de Felipe Calderón (2006 - 2012) se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70,000 fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico.** Según Heyns, debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.

Del 2006 al 2014 la CNDH emitió 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y 6 la Secretaría de Marina. Así pues, **3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.** Estas cifras resultaron alarmantes para el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, al poner de manifiesto las violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos militares.

El uso de la fuerza indiscriminada por parte del Estado para contrarrestar el uso de drogas y la proliferación de mercados ilegales ha resultado particularmente mortífero para las generaciones más jóvenes. **Actualmente, uno de cada cuatro muertos de la guerra contra el narcotráfico es joven.** El incremento de la violencia y la inseguridad en el país ha tenido un impacto particular en las y los jóvenes entre 20 y 29 años de edad. Durante los últimos años, la tasa de homicidio juvenil se ha triplicado, pasando de 7.8 jóvenes asesinados por cada 100 mil en 2007 a 25.5 por cada 100 mil en 2011. Es así que **desde el año 2008 la principal causa de muerte entre jóvenes en México es el homicidio**, incluso superior que los accidentes de tránsito, que históricamente habían sido la principal causa de muerte entre jóvenes.

Desaparición Forzada



La desaparición forzada de personas ha resurgido en México con una fuerza estremecedora desde la *guerra contra el narcotráfico*. A diferencia de lo que se vivió en México en los años de la llamada Guerra Sucia, en donde las desapariciones se cometían con motivos políticos, hoy en día no sólo se comete en contra de líderes sociales, activistas políticos o integrantes de grupos insurgentes, sino que se extiende a amplios sectores de la población. Las desapariciones de la guerra sucia no han sido investigadas y en aquellas fechas se trató de una práctica sistemática que trajo como resultado más de 788 personas víctimas de desaparición forzada, según cifras de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Uno de los casos más emblemáticos de la CMDPDH que ejemplifican la impunidad en México en relación a la desaparición forzada de esa época es el **caso de Rosendo Radilla**. En agosto de 1974, el señor Radilla fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. La detención y desaparición forzada del Señor Radilla fue denunciada por la familia ante las instancias del gobierno. Ante la falta de una respuesta y debida diligencia por parte del Estado, la CoIDH emitió su primer sentencia contra el Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación. A raíz del caso Radilla se han originado importantes cambios estructurales en la vida pública del país, como lo fue la reforma al Código de Justicia Militar, la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada, sin que a la fecha se tengan resultados. Peor aún, los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia. Pese a las diversas recomendaciones de organismos internacionales y sentencias de la CoIDH, estos hechos siguen impunes.

Hay una falta de precisión y concordancia en las cifras de personas desaparecidas en el país. En mayo de 2014, el Secretario de Gobernación informó que del año 2006 a 2012, 27 mil personas habían sido reportadas como desaparecidas. Posteriormente, en agosto de ese mismo año la Procuraduría General de la República (PGR) proporcionó una cifra oficial de 22 mil 322 personas “no localizadas”. Por su parte, el Presidente de la CNDH, informó que dicha institución tenía registro de 24,800 personas desaparecidas “que no habían encontrado en las autoridades del Estado mexicano una respuesta eficaz en su búsqueda y localización”. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas arroja la cifra de 22, 322 personas “no localizadas” al 31 de julio de 2014. La inconsistencia en las cifras, refleja una falta de metodología rigurosa y confiable que permita atender el panorama real de la desaparición forzada en México.

Por otro lado, se tiene información oficial de que del 2006 al 2014 la Procuraduría General de Justicia había iniciado 200 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas y tan sólo había consignado a 15 personas por ese delito.

En los casos sobre desaparición forzada de personas que la CMDPDH ha documentado, las autoridades, federales, estatales y municipales, han mostrado falta de voluntad para llevar a cabo investigaciones adecuadas y efectivas para determinar los responsables y conocer el paradero de las víctimas. Aunado a esto, no existe un marco normativo adecuado que permita llevar a la justicia a los responsables, ni mecanismos efectivos de colaboración para la búsqueda de las personas desaparecidas. Además, las víctimas en ocasiones son criminalizadas y acusadas por pertenecer a la delincuencia organizada o a otros grupos considerados como enemigos del Estado.

Tortura



A pesar de que el país ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, la tortura, incluida el uso de la violencia sexual como forma de tortura, sigue siendo practicada de manera generalizada en todo el país y utilizada como herramienta para la investigación de delitos con el objeto de extraer confesiones o información incriminatoria.

En el marco de la *guerra contra el narcotráfico*, **la CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 quejas en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1.148 quejas por violaciones atribuibles solo a las fuerzas armadas por tortura.**

Por otro lado, **la PGR recibió más de 4 mil denuncias por tortura en el periodo de 2006 a 2014, de las cuales inició 1,005 investigaciones. No obstante, sólo se han consignado 11 casos.**

Por tal motivo el Relator Especial de la ONU sobre Tortura calificó dicha práctica como generalizada en el país. Constató que el alto número de denuncias recibidas de tortura, no se reflejan en igual número de investigaciones y condenas, signo de una preocupante impunidad. **El Gobierno informó que de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013, dos han quedado firmes.**

Uno de los factores que contribuye a la impunidad de la tortura es que la legislación no contempla la imprescriptibilidad de la tortura, ni la responsabilidad de los superiores (jefes militares o civiles). Tampoco se han adoptado medidas que trasciendan a la persecución y castigo de la tortura para incorporar la prevención y la reparación integral del daño.

Una situación que agrava la incidencia de tortura es la existencia de un régimen de excepción constitucionalizado para enfrentar a la llamadas organizaciones de la delincuencia organizada. Dicho régimen se sustenta en figuras como el arraigo, la prisión preventiva automática por tipo de delito, los testigos protegidos, además de involucrar en las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas con capacidad operativa independiente, sin verdaderos controles civiles en el terreno. Las víctimas de tortura generalmente son acusadas de vínculos al crimen organizado o de portar sustancias prohibidas, a pesar de que muchas de ellas son personas a quienes nunca se les puede probar ningún delito. No obstante son detenidas, torturadas y forzadas a firmar confesiones autoinculpatorias o testimonios para incriminar a otras personas.

El arraigo y la detención con control judicial son medidas privativas de la libertad, empleadas en una investigación penal para obtener información de una persona sin que ésta se encuentre acusada de algún delito; es decir, mantienen a una persona privada de libertad por un periodo prolongado de 40 hasta 80 días, mientras se investiga y decide su situación legal. La CMDPDH ha registrado que **del 2009 al 2014 se han arraigado a 14,523 personas** sólo por delitos del fuero federal. Además, se ha documentado que las personas son arraigadas en cuarteles militares y en hoteles.

Por tanto, la CMDPDH ha denunciado que estas medidas fomentan el uso de tortura y pese a que diversos organismos internacionales de la ONU, han recomendado erradicar esta figura, el Estado mexicano ha sido omiso y resistente a eliminar esta figura de la Constitución, la cual es claramente incompatible con el derecho internacional de derechos humanos.

Desplazamiento Interno Forzado



México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de los setenta, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa (entre católicos y minorías de indígenas protestantes), conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados. En los años noventa, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el ejército mexicano y las policías locales desplazando a miles de personas. En particular, en 1994, el conflicto zapatista en Chiapas originó un desplazamiento sin precedentes en México y se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado.

La política de enfrentamiento abierto contra los cárteles de las drogas y el uso de operativos conjuntos en el marco de la *guerra contra el narcotráfico*, en los que participaron el ejército mexicano, la marina, la policía federal y las policías locales, así como la subsecuente lucha por rutas de distribución de drogas entre los cárteles, aumentaron la actividad criminal y por tanto la inseguridad. Delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso (protección ilegal), robos de bienes materiales, desapariciones, reclutamiento forzado, secuestros y homicidios de familiares, han detonado éxodos masivos de personas.

Además, la presencia del ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitada por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad. Ciertas violaciones a los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas) se pueden calificar de generalizadas o sistemáticas y miles de civiles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas del crimen organizado.

La CMDPDH ha recopilado información que indica que **entre los años 2011 y 2015 (febrero), 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados de la República mexicana como consecuencia de la violencia.**

El desplazamiento interno forzado más recurrente, invisible y por lo tanto no registrado, es el que se presenta gota a gota, es decir cuando núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad de origen, de manera aislada. Sin embargo, de la cantidad total mencionada, cerca de un tercio corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos que se han registrado en 14 de los 32 estados del país. Los desplazamientos masivos consisten en el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común, y los mismos han tenido lugar principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. No obstante, no se cuenta con información oficial, ni periódica disponible de ciertos estados de la República que registran altos índices de violencia como por ejemplo Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.

Las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia. La CMDPDH, a partir de su trabajo de representación de víctimas en varios estados de la República ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población, como por ejemplo no investigan efectivamente los delitos que se comenten en contra de la población que es forzada a desplazarse.

Situación de Defensoras/es de Derechos Humanos



En México existen defensores y defensoras que son líderes de movimientos sociales, líderes sindicales, líderes de pueblos indígenas y comunidades, miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas de los derechos de las mujeres y de la población LGTTBI, víctimas del delito, abogados, abogadas, y periodistas.

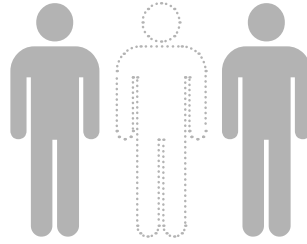
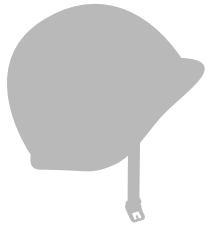
Sin embargo, la naturaleza de su trabajo y dado el contexto de violencia e impunidad generalizada en el país, son de los grupos más vulnerables en México, ya que se enfrentan al hostigamiento, el desprestigio, la vigilancia, el robo de información, la judicialización indebida, la amenaza de muerte, el asesinato y la desaparición forzada.

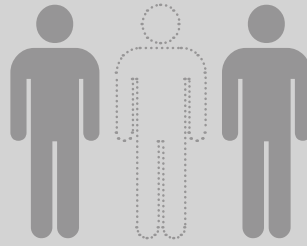
Los datos publicados por actores nacionales e internacionales reflejan el clima de hostilidad contra las personas defensoras de derechos humanos en un contexto de impunidad. Según informes de la ONU, **desde el 2006 y hasta 2012, 22 personas defensoras y 5 integrantes de sus familias han sido asesinadas por motivos relacionados con las causas que defendían; además, se desconoce el paradero de 6 personas defensoras.**

La CNDH, por su parte, documentó **27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras durante el periodo de enero de 2005 y mayo de 2011.** Organizaciones de la sociedad civil recogen un mayor número de agresiones. **De 2011 a 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró 104 casos de agresión a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con un total de 409 agresiones y 27 asesinatos, siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor registro de casos. No obstante, en prácticamente el 100% de los casos quedan impunes.**

Entre la población más vulnerable se encuentran las mujeres defensoras con 34 defensoras asesinadas desde el 2001; y las defensoras y los defensores del derecho a la tierra y del medioambiente, con 82 ataques y 4 homicidios sólo de 2013 a 2014.

México cuenta con una Ley de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada el 30 de abril de 2012, la cual crea un Mecanismo que busca garantizar la seguridad e integridad de los defensores en riesgo. Sin embargo, su implementado no ha sido del todo eficaz, al no contar con suficiente personal capacitado, existen demoras en el uso de los fondos, por falta coordinación y difusión, así como compromiso político de altos funcionarios gubernamentales. Aunado a esto, el funcionamiento del Mecanismo de Protección no podrá ser sustentable si en el país no se llevan a cabo investigaciones y procesos jurídicos, incluidos penales que conlleve a la detención y sanción de los responsables de las agresiones contra defensores de Derechos Humanos.





The Vulnerable Situation of Human Rights Defenders



Amongst the human rights defenders in Mexico there are social movement leaders, union leaders, indigenous leaders, members of nongovernmental organizations, women's rights activists, members of the LGBT community, victims of human rights violations, lawyers and journalists.

Considering the nature of their job and the intense violence and impunity all around the country, human rights defenders are a vulnerable group in Mexico, constantly being harassed, discredited, intimidated, threatened, murdered and enforced disappeared.

Statistics published by national and international organizations reflect the hostile environment against human rights defenders in a context of impunity. According to information given by the United Nations, **since 2006, 22 human right defenders and 5 of their closest relatives have been murdered for reasons related to their work. Six more are still missing.**

The National Human Rights Commission has documented 27 murders and 8 forced disappearances of human rights defenders from January 2005 to may 2011. Civil society organizations have registered an even higher number of aggressions. **From 2011 to 2013, the Mexican Human Rights Network has registered 104 cases of aggressions against human rights defenders and organizations, with a total of 409 aggressions and 27 murders, being Oaxaca and Guerrero the states with the highest number of cases. Almost 100% of these cases remain unpunished.**

Among the most vulnerable populations are women human rights defenders. 34 have been murdered since 2001. On the other hand, 4 land and environmental defenders have been murdered and 82 have suffered aggressions.

Mexico approved the Law on Protection of Human Rights Defenders and Journalists on April 30th, 2012. This law establishes the creation of a mechanism that intends to guarantee the safety and integrity of human rights defenders. Unfortunately, it has not been able to achieve its objective due to lack of personnel, insufficient funds, lack of coordination and the indifference of high-ranking politicians. The protection mechanism is not sustainable without investigations and prosecutions that lead to judgments against those who perpetrate aggressions against human rights defenders.

Forced Internal Displacement



Mexico has suffered from forced internal displacement since 1970; traditionally, the causes have been mainly religious intolerance (between indigenous protestant minorities and catholic majorities), communal conflicts, and disputes over land and natural resources in some states. In the nineties, other causes emerged such as growing insecurity and political conflict, where the Mexican army and local police intervened displacing a large number of people. In 1994, the Zapatista movement in Chiapas caused a wave of

displacement of dimensions never before seen in Mexico; until today it is estimated that more than thirty thousand people are still living in a situation of protracted internal displacement as a consequence of the conflict between Zapatistas and the government.

The policy of open confrontation against drug cartels and the use of joint operatives between the army, navy, federal and local police within the framework of the *war on drugs*, together with the emergence of disputes for land distribution routes between the cartels, increased the criminal activity and therefore the levels of insecurity increased as well. Crimes such as extortion, charging illegal protection fees (*cuotas de piso*), disappearances, forced recruitment, kidnappings and murders have triggered the flight of many families.

The presence of the Mexican army in the streets of some of the cities that have been most affected by crime has also been perceived by society as another cause of insecurity. Certain violations to human rights perpetuated by local and federal authorities (such as torture, extrajudicial executions, and forced disappearances) are widespread and systematic, and thousands of civilians have been either killed in crossfire or have been direct victims of the organized crime.

CMDPDH has collected information that indicates that **between 2011 and 2015, 281,418 persons have been internally displaced in various states of the Mexican Republic as a consequence of violence.**

Dispersed internal displacement (drop by drop) is most recurrent but also invisible, and therefore it is usually not registered. It takes place when individual households abandon their place of residence. Nevertheless, about a third of the total number of internally displaced persons corresponds to 141 mass displacements that have been identified in 14 of the 32 states that constitute the Mexican Republic. Mass displacements take place when ten or more families from a community flight simultaneously due to the same event. This phenomenon has taken place mainly in Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca and Chiapas. However there is a lack of either journalistic or official information available about this phenomenon particularly from certain states with a high violence index, like Tamaulipas, Coahuila or Veracruz.

People forced to displace internally do not have access to institutions or mechanisms for their assistance or protection. CMDPDH, through the victim representation work carried out in various states of Mexico, has been able to assert that local governments do not have the capacity or the will to guarantee and protect the rights of this sector of the population. For instance, they do not investigate effectively the crimes committed against the people forced into displacement.

Torture



In spite of the fact that Mexico has ratified most of the international treaties on Human Rights, torture (including sexual violence), is still being implemented around the country and used as a tool to investigate crimes in order to obtain confessions and incriminating information.

In the context of **the war on drugs, the Ombudsman recorded an increase in complaints of torture and ill-treatment since 2007 and reported a maximum of 2,020 complaints in 2011 and 2,113 in 2012, compared with an average of 320 complaints in the six years previous to 2007. Between December 2012 and July 2014, the National Human Rights Commission received 1,148 complaints alleging violations and torture attributable only to the armed forces.**

On the other hand, **the Attorney General's Office received more than 4,000 complaints of torture in the period 2006-2014, of which 1,005 investigations were initiated. However, only 11 cases have reached a sentence.**

The United Nation's Special Rapporteur on Torture stated that torture is a widespread and systematic practice in Mexico. He noted that the high number of complaints of torture that have been received are not reflected in an equal number of investigations and convictions, a worrying sign of impunity. **The Government informed that only two out of five condemnatory sentences from 2005 to 2013 have been definitive.**

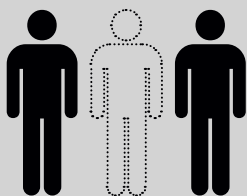
One of the factors that contributes to impunity in cases of torture is the absence of imprescriptibility of the practice in legislation and the non-existing incrimination regulations of superiors (military or civil). Measures that transcend the prosecution and sanction of torture in order to incorporate prevention and reparations have not been adopted.

A situation that exacerbates the use of torture is the existence of a constitutional emergency regime to combat organized crime. Such regime is based on legal provisions such as *arraigo* (pre-charge judicial detention), automatic pre-trial detention for certain crimes, witness protection, and the incorporation of military forces on civil tasks without any controlled civil supervision. Victims are frequently accused of drug possession and ties with organized crime, in spite of being found innocent on all charges against them, and are then tortured and forced to sign confessions to incriminate other people.

Arraigo and detention with judicial control are measures of deprivation of liberty used during on-going investigations in order to obtain information from a person that is not being held on criminal charges, but is legally deprived of his or her liberty during a period of up to 80 days while being investigated of any possible charge against them.

The CMDPDH has proven that these measures have reinforced the use of torture, and despite the support from other international organizations such as the United Nations Organization, the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture, The Working Group on Arbitrary Detention, The Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, The Special Rapporteur on Torture, the Universal Periodic Review Mechanism, amongst others, to eradicate *arraigo* from the Constitution, the Mexican Government has persisted on preserving this figure, in clear opposition to all international human rights treaties.

Enforced Disappearance



Enforced disappearance has resurfaced in Mexico with shocking force as a result of the war on drugs. Unlike what was experienced in Mexico in the years of the so-called Dirty War, where disappearances were committed for political reasons, today it is not exclusively focused against social leaders, political activists or members of insurgent groups, instead it extends to large sectors of the population. The disappearances of the Dirty War have not yet been investigated and in those days it was a systematic practice

that resulted in more than 788 victims of enforced disappearance, according to figures from the Special Prosecutor for Social and Political Movements of the Past (Femospp).

One of the most emblematic cases that the CMDPDH accompanies and that exemplifies impunity in Mexico in relation to the disappearances of the Dirty War is the case of Rosendo Radilla. In August 1974, Mr. Radilla was illegally detained and disappeared by the Mexican Army. Since then, his whereabouts remain unknown. The detention and forced disappearance of Mr. Radilla was denounced by the family before governmental institutions and tribunals. In the absence of a reply and the lack of due diligence by the State, the Inter-American Court of Human Rights issued its first judgment against the Mexican government for serious violations of human rights and ordered a number of provisions of compensation. The Radilla case has caused significant structural changes in the public life of the country, including the reform of the Code of Military Justice and the obligation to abide by standards of international law in relation to the investigation and prosecution of enforced disappearance. Nonetheless, despite of the relevance of the judgment, government has not been able to fulfill its obligations. Even worse, the material and intellectual authors of these violations have not been brought to justice. Despite the various recommendations of international organizations and judgments of the Inter-American Court of Human Rights, these actions remain without being prosecuted.

There is a lack of precision and consistency in the numbers of missing persons in the country. In May 2014, the Secretary of the Interior reported that from 2006 to 2012, 27,000 people were reported missing. Subsequently, in August of that year the Attorney General's Office (PGR) provided an official figure of 22 thousand 322 people that "have not been localized". On the other hand, the Ombudsman reported that the National Human Rights Commission has recorded 24,800 missing persons "who have not been able to find effective response from the Mexican State authorities". The National Registry of Missing Persons states that there are 22, 322 missing persons. The inconsistency on the figures reflects a lack of rigorous and reliable methodology to address the real picture of enforced disappearance in Mexico. However, the UN Committee on Enforced Disappearances described the practice of disappearance in Mexico as widespread.

On the other hand, **from 2006 to 2014 the Attorney General's Office began 200 preliminary investigations for the crime of enforced disappearance of persons, however, only 15 people had been remanded.**

In the cases of enforced disappearance of persons that the CMDPDH has documented, federal, state and local authorities, have shown unwillingness to carry out adequate and effective investigations to determine those responsible and the whereabouts of the victims. There is not an appropriate regulatory framework in place to bring to justice those responsible, and there are no effective collaborative mechanisms for tracing missing persons. In addition, victims are sometimes criminalized and accused of belonging to organized crime or other groups considered enemies of the State.

Extrajudicial Executions



In Mexico the concept of execution is used ambiguously, both by the media and by governmental institutions. This precludes the existence of a clear statistical record. The only official record of homicides that exists in Mexico is coordinated by the National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI). This register provides information on deaths in the country, specifying death by murder or other violent causes. However, it does not include information on the specifics of the crime, which prevents the possibility of determining how many cases of human rights violations are.

According to official figures, the war on drugs broke a tendency of almost 20 years in the national homicide rate, which had consistently declined each year, reaching a record low of 8 homicides per 100,000 inhabitants in 2007. **In 2011 the homicide rate reached 24 per 100,000 inhabitants. According to INEGI records, between 2007 and 2011, 95,646 homicides were reported; this means an average of more than 50 people per day.**

In June 2014, the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, stated in his final report on his mission to Mexico that **during the administration of Felipe Calderón (2006-2012) 102, 696 intentional homicides were reported, of which 70,000 were related to the drug war.** According to Heyns, due to the lack of clear research it's impossible to be certain of which were caused by organized crime cartels and which by state security elements.

From 2006 to 2014 the National Human Rights Commission (CNDH) issued 56 recommendations regarding deprivation of the right to life, involving 187 victims; 31 were directed to the Secretary of National Defense and 6 to the Navy. Thus, 3 out of 4 CNDH recommendations concerning the right to life in that period were directed to the armed forces. These figures were alarming for the Rapporteur on extrajudicial executions.

The use of indiscriminate force by the State to counter drug use and proliferation of illegal markets has been particularly deadly for younger generations. **Currently, one in four deaths in the war on drugs is a young person.** The increase in violence and insecurity in the country has had a particular impact on the young people between 20 and 29 years old. In recent years, the youth homicide rate has tripled from 7.8 young people killed per every 100,000 in 2007 to 25.5 per 100,000 in 2011. Thus, **since 2008 the leading cause of death among young people in Mexico is homicide**, even higher than traffic accidents, which had historically been the main cause of death among young people.

Militarization of Public Security



With the launch of the war on drugs by former President Calderón the armed forces were assigned a central role in public security strategy. This policy placed the premises of national security above the protection of human rights, including those that cannot be suspended.

In the former administration 96,000 military were involved in national security tasks. The first month of the administration of Enrique Peña Nieto registered 49,000 military deployed.

Such has been the magnitude of the intervention of the military in operations that correspond to the police that **from 2006 to 2012, 50,915 civilian detentions carried out by the military were recorded.** So far, during the administration of President Peña Nieto (**until January 2015**) **there have been 12,840 civilians detained by military forces.** Meanwhile, there have been 6,254 civilians detained by the Mexican Navy from **2006 to 2014; this institution has performed 1,770 joint operations with other municipal and federal institutions from 2012 to 2014.**

Through the experience of working with victims of human rights violations, the Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH) has documented cases involving civilian casualties, with the proven participation of military elements in serious human rights violations such as torture, extrajudicial executions and enforced disappearances. These violations have been committed within the framework of the war on drugs in 2006 and have been present in other moments of Mexico's recent history, such as the *Guerra Sucia* (Dirty War) and the armed conflict in Chiapas (1994-1997).

The Inter-American System of Human Rights, meaning both the Commission (IACHR) and the Inter-American Court of Human Rights, have observed evidence that military jurisdiction, as is regulated in Mexico, is not compatible with the American Convention on Human Rights.

In 2014, the Code of Military Justice was reformed in order that the military institutions responsible of investigating, prosecuting and punishing the perpetrators of violations of military discipline could no longer hear cases that constitute violations of human rights where the victims are civilians. However, despite this reform, the jurisdiction of military courts still covers human rights violations in cases where the victims are military.

Moreover, military jurisdiction, as currently regulated, does not guarantee the principles for the proper administration of justice in relation to its independence and impartiality. The fact that military courts are composed of magistrates and judges who are military officers appointed by the Secretary of National Defense leads in practice to executive officials performing judicial functions. This is contrary to the principle of separation of powers and the independence inherent to every court of law.

Prohibition policies regarding drugs have failed in their goal of achieving a “drug-free world” and have forced the drug market to remain illegal. This has triggered an illicit market, exclusively controlled by organized crime cartels, who have created links to other criminal markets and use violence as a primary form of regulation.

In December 2006, former President Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) launched an open confrontation strategy against organized crime locally known as *guerra contra el narcotráfico* and known internationally as the war on drugs. This policy set de facto military control over the country’s public security through the deployment of thousands of troops throughout the national territory and the replacement of multiple civil government leaders of public security institutions at all levels by active and retired military elements.

An example of this is the fact that elements of the military and federal, state and municipal police forces systematically transfer arrested civilians to military or exclusive control facilities, where without any monitoring of civil authorities, detainees suffer ill treatment, torture and even enforced disappearance. It has also been documented how in joint operations with civilian authorities, military elements dress in civilian clothing.

The press and mass media have systematically spread the federal government’s vision, where people who are killed as a result of the strategy against organized crime are not civilians but “fallen criminals”, without any prior investigation and despite the fact that in many cases it was subsequently proven that they did not belong to any group or organized crime and posed no “threat” to society.

Additionally, the violent confrontation of civil public security and armed forces against organized crime groups has increased. The cartels’ territorial division was disbanded, the fight for drug distribution routes intensified and large cartels were fragmented into smaller groups that fought for territorial control, diversifying their criminal activity. Likewise, there has been indiscriminate use of lethal force and an unjustifiable extension of State powers, through the adoption of laws and figures, such as *arraigo* (pre-charge judicial detention) and protected witnesses, which operate to the detriment of judicial rights and guarantees.

In 2012 the administration of President Enrique Peña Nieto began. The discourse of war promoted by the Calderon administration was replaced by one of institutional strengthening and building a full rule of law. However, the security strategy has not changed significantly.

As a result of the inertia of these strategies, Mexico has accumulated alarming numbers of dead, enforced disappeared and displaced persons, and as a result of the widespread violence there has been an increase in corruption and impunity.

Index

Militarization of
Public Security

6

Extrajudicial
Executions

7

Enforced
Disappearance

8

Torture

9

Forced Internal
Displacement

10

The vulnerable
situation of human
rights defenders

11

Directory

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Board of Directors

Ximena Andi3n Ibañez (Presidenta)
Alejandro Anaya Muñoz
Beatriz Solís Leere
José Luis Caballero Ochoa
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Paulina Vega González
Susana Erenberg Rotbar

Executive Director

José Antonio Guevara Bermúdez

Defense Coordination

Nancy Jocelyn López Pérez (Coordinator)
Isis Nohemí Goldberg Hernández
Mariana Teresa Peguero
Natalia Pérez Cordero
Nayomi Aoyama González
Ángel Gabriel Cabrera Silva
Valeria Patricia Moscoso Urzúa (Psychosocial attention)

Investigation Coordination

Lucía Guadalupe Chávez Vargas (Coordinator)
Alejandra Leyva Hernández

Incidence Coordination

Olga Guzmán Vergara (Coordinator)

Photography

Germán Canseco/ Procesofoto

Design

El recipiente

Contact

Address: Tehuantepec #142, Col. Roma Sur,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.
Phone: +52(55) 5564 2582
E- mail: info@cmdpdh.org
www.cmdpdh.org

Social Media



@cmdpdh



/cmdpdh

YouTube /CMDPDH

Coordinación de Comunicación

Mariana Beatriz Gurrola Yáñez (Coordinator)
Luis María Barranco Soto

Institutional Development Coordination

María Cappello (Coordinator)

Administration Coordination

Eduardo Macías Sánchez (Coordinator)
Teresita de Jesús Landa Bernal

Human Rights Defenders Coordination

Axel García Carballar (Coordinator)
Graciela Martínez González
Lizbeth Montessoro Elías

Forced Internal Displacement Coordination

Brenda Gabriela Pérez Vázquez (Coordinator)
Cristina Mac Gregor Vanegas
Daniela Bachi Morales

Consultant in Forced Internal Displacement

Laura Gabriela Rubio Díaz Leal

Human rights violations in the context
of the War on Drugs in Mexico

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE CONTEXT OF THE WAR ON DRUGS IN MEXICO

